

# *Poder Judicial de la Nación*

**CCCF –Sala II-**

**CFP 2876/2018/9/CA5**

**“Mardiza, Fernando Darío y otros s/  
procesamiento”**

**Juzgado n° 7 - Secretaría n° 14**

//////////nos Aires, 10 de abril de 2025.

## **VISTOS Y CONSIDERANDO:**

**Los Dres. Martín Iruzun y Eduardo Farah dijeron:**

**I.** Motivan la intervención de la Cámara las apelaciones presentadas por los abogados defensores contra el auto de mérito dictado por el juez el pasado 14 de diciembre de 2024:

**a)** El Dr. Subías, por la defensa de Fernando Darío Mardiza y G. T. L., apeló los puntos II, V, X, XI, XII y XIV de la resolución. Sostuvo que no se zanjaron los fundamentos que llevaron al Tribunal a decretar la falta de mérito en la anterior revisión, de modo que no se acreditó la falsificación de certificados de obra ni el fraude que con ello se lograba. Por ende, tampoco pudo probarse que las contrataciones a L. o a MyC sean un retorno por el favorecimiento del funcionario. También criticó el concurso entre las figuras y la categorización de Mardiza como autor de una defraudación, porque era un técnico que nunca administró ni liberó un pago. Finalmente, impugnó la prohibición de salida del país y el monto de los embargos, y criticó que no se haya escuchado a los funcionarios a los que Mardiza reportaba. Luego, amplió sus fundamentos con la presentación de un memorial.

**b)** El Dr. Suárez, defensor de C. M., impugnó los dispositivos V, X, XI y XIV. Su crítica se centró en cuestionar los argumentos del juez para considerarlo un prestanombres de Crisci. Explicó que la transferencia de INAC fue onerosa y genuina, que se realizó ante escribano público previo a la licitación de la obra y que los documentos que aportó (presupuestos suscritos por M.) demuestran que controlaba la empresa. Además, alegó que las facturas extendidas a T. y F. C.

Fecha de firma: 10/04/2025

Alta en sistema: 15/04/2025

Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO JOSE BOICO, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: GASTON GONZALEZ MENDONCA, SECRETARIO DE CÁMARA



#39611682#451328730#20250410125626815

USO OFICIAL

(esposa e hijo del funcionario Guillermo Crisci) corresponden a servicios reales, de contaduría e ingeniería, respectivamente. Relativizó el valor de que el pago por la cesión se hubiese atado a cobros futuros, que la empresa no tuviese oficina ni empleados, que los ingresos hubiesen disminuido cuando Crisci fue desvinculado de Vialidad y que los presupuestos de INAC se encuentren dirigidos a B. y G. (de relación personal con Crisci). Finalmente, defendió los servicios prestados a la UTE como genuinos, argumentó que la instrucción se hallaba incompleta y criticó el monto de embargo. Presentó un memorial sosteniendo su postura.

c) El Dr. Jáuregui Lorda, defensor de E. L., apeló los puntos III, X y XI del resolutorio, que dispusieron el procesamiento, la prohibición de salida del país y el monto de embargo de su asistido, respectivamente. Criticó que la atribución de responsabilidad a su defendido es objetiva, por ser topógrafo de obra, sin atribuírsele una conducta concreta; la calidad del informe en el que se basó el juez para decir que el volumen de terraplén ejecutado sería inferior al que fue abonado; que ningún presunto retorno fue en beneficio de L.; que el monto de embargo no tiene relación con su participación; y que la prohibición de salida del país no procede porque tiene domicilio en el país y estuvo siempre a disposición del tribunal. Mantuvo sus argumentos con la presentación de un memorial.

d) El Dr. Zunino, defensor de A. A. y C. R., apeló los puntos IV, X y XI de la resolución. Refirió que ambos son técnicos que ejecutaron bien su trabajo, que la obra fue premiada, que no se probó la subejecución del terraplén y que no se dispuso un peritaje a tal fin. Alegó que el Juzgado realizó prueba tras la falta de mérito, pero sin sumar alguna de cargo, y que los actos posteriores de la DNV convalidaron el trabajo. Dijo que la auditoría encabezada por Hiriart no fue objetiva porque tuvo la intención deliberada de buscar pruebas contra un funcionario sospechado y refirió que el suelo que la inspección encontró suelto confirma que las mediciones no se corresponden con la base de asiento. Finalmente, solicitó la nulidad del embargo y la revocatoria de la prohibición de salida del país.



## *Poder Judicial de la Nación*

USO OFICIAL

e) La Dra. Fiorito y el Dr. Morán, por la defensa de Gabriel Losi y de Losi SA, apelaron los puntos I, II, III y IV del auto del juez. Negaron que se haya comprobado un falseamiento o subejecución y destacaron que la interpretación de la información extraída del GPS se contradice con el hallazgo de relleno de suelo suelto. Se apoyaron en la evaluación de la consultora Justo Domé & Asociados, en que la obra fue premiada, en la actividad administrativa posterior del organismo vial, en que es irrazonable pensar en obtener un rédito por esa vía y en los controles de la Universidad de La Plata y del BID. Además, insistieron en que el instrumento oficial de medición era otro y que los pagos a las empresas y personas vinculadas a los funcionarios son contrataciones reales y legales. Refirieron que la atribución de responsabilidad a Gabriel Losi es objetiva, que la conversación entre Crisci y Guzmán Arguello refiere a otra obra, que la Ing. Hiriart carece de experiencia y que el Juzgado no accedió al peritaje propuesto. Finalmente, apelaron el monto de embargo y la prohibición de salida del país. En la oportunidad del art. 454 del CPP, presentaron memorial.

f) El Dr. Sal, representando a J. H. F., M. P. y L. P. P. SA, impugnó los dispositivos VI, VII, X, XI, XII, XIII y XIV de la resolución. Alegó que el juzgado realizó una atribución de responsabilidad sin sustento fáctico y atacó la selección que el juez hizo de la prueba relevante al caso, argumentando que nada cambió desde el auto de mérito anterior. Recordó que el tramo en el que se habrían constatado irregularidades corresponde a Luis Losi SA y que nada se halló en el otro. Resaltó que Hiriart, en su declaración, expresó que *“no es posible afirmar si se borró información o si nunca hubo”* en la estación total de P.. Criticó también que al juez le resulte sospechoso que falten mensajes en las conversaciones entre G. y Mardiza e insistió en que la obra era controlada por la Universidad de La Plata y por el BID. Manifestó que sus defendidos desconocían la relación entre L., Mardiza y MyC y que la contratación fue legítima, no pudiendo hablarse de retorno si no hubo una previa irregularidad. Alegó que F. ningún beneficio obtuvo de esa contratación y que M. P. ni siquiera participó en el Comité ejecutivo de la UTE (que se confunde



la solidaridad civil con la responsabilidad penal). También se quejó de que no se produjera más pruebas. Finalmente, criticó que las atribuciones no se basen en elementos objetivos, que el juez refirió a la “*propensión de la empresa a falsear datos*”, que la ley 27.401 no estaba vigente a la fecha del hecho, los montos de embargo y las restricciones para salir del país. Durante el trámite recursivo, los imputados y la empresa cambiaron sus defensores, quienes presentaron sendos memoriales sosteniendo las críticas.

**II.** En su anterior intervención en la causa, quienes suscriben revocaron los procesamientos dictados sobre la base del cuadro probatorio existente. El juez –además de insistir sobre algunas posiciones que ya había expuesto, explicando cómo para él se tienen que valorar las evidencias en este tipo de procesos- invocó nuevos elementos que, según entendió, modificaban y reforzaban el panorama antes valorado por el Tribunal. Las defensas niegan esta situación.

El estudio del caso lleva a advertir que, efectivamente, parte de lo que se estimó faltante cuando se declaró la falta de mérito de varios imputados, ha sido averiguado por vía de indicios novedosos. Aquellos, merituados en conjunto con lo que ya se sabía en el legajo, crean un escenario distinto, en que las pruebas de cargo superan en fuerza de convicción a las descargo. Está satisfecho así el estándar de corroboración que exige el art. 306, CPPN, en orden a las hipótesis acusadoras. Los procesamientos de los implicados serán confirmados.

En efecto:

**(1)** Hay más de un hecho dentro del objeto de la instrucción. El eje central de aquellos gira en torno a una maniobra de fraude en perjuicio de la administración pública concretada entre los meses de mayo y diciembre del año 2017, que consistió en simular una ejecución de terraplén mayor al volumen realmente construido en la obra vial desarrollada en la Ruta Nacional N° 19, Provincia de Córdoba, Tramo II “Cañada Jeanmarie – Arroyito”.

En particular, se concretó a partir de la consignación falsa de las mediciones de los perfiles de la base de asiento en los certificados

---

Fecha de firma: 10/04/2025

Alta en sistema: 15/04/2025

Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO JOSE BOICO, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: GASTON GONZALEZ MENDONCA, SECRETARIO DE CÁMARA



#39611682#451328730#20250410125626815

# *Poder Judicial de la Nación*

correspondientes al estado de avance y desarrollo de la obra vial mencionada, lo cual ocasionó el pago indebido por parte del Estado Nacional de una suma dineraria que, de mínima, alcanzó los \$9.429.483,84 –a valor de contrato, sin actualizar-, en concepto de la sub-ejecución de terraplén cuantificada en 67.152 m3.”

Según los cargos formulados, “...la mecánica instituida para que la empresa contratista cobrara de más por trabajos que, en realidad, no eran efectuados, radicó en la presentación mensual de certificados de obra que reflejaban esa irregularidad – junto con la documentación de respaldo-...”.

(2) En su momento, los suscriptos advirtieron una situación de incertidumbre sobre la acreditación de esta cuestión (CFP 2.876/2018/3/CA3 del 7/9/23).

Se observó que lo testimoniado por María Agustina Hiriart - Ing. integrante de la Unidad de Supervisión de Obras del organismo que dirigió una inspección realizada en la propia obra vial a fines de diciembre del año 2017-, al ser contrastado con las alegaciones de defensa, era insuficiente para determinar cómo y por qué se había expuesto una discordancia entre los trabajos certificados y cobrados por la empresa, y los efectivamente realizados. Existía controversia en punto a qué tipo de auditoría se realizó y la influencia de ello en el resultado final.

En aquel fallo, se destacó que no se había tomado declaración a Mariano A. López -quien oficiaba como Coordinador de Obras en la Dirección Nacional de Vialidad-, G. A. y O. B. (Agrimensor), pertenecientes a la sección Tierras del Segundo Distrito Córdoba, quienes también habían participado de la inspección, según las constancias realizadas.

Ahora los tres han dado su testimonio. Y todos ratificaron la finalidad, el modo y demás circunstancias en que la auditoría se llevó a cabo. Los dos últimos integraron la comitiva; explicaron que fueron convocados para acompañar y brindar apoyo a Hiriart, quien había sido enviada por Casa Central - el trabajo junto a ella no era usual, sino que fue meramente coyuntural-. López fue

USO OFICIAL



quien ordenó la auditoría y quien recibió el informe. Todos ellos respaldaron la corrección técnica del trabajo realizado y sus conclusiones.

El testimonio de A. ratificó que cuando arribaron al lugar fueron recibidos por Mardiza y S. y fue claro al decir que se solicitó el equipo utilizado para las mediciones y se les entregó el GPS porque, según se informó, las estaciones totales no se usaban.

Además, refirió al procedimiento técnico de extracción y a la experiencia que tiene B., a quien calificó como el mejor topógrafo del organismo y la persona más idónea para operar el instrumental. Contó el modo en que el personal de la empresa interrumpió la tarea y les quitó el GPS y que tras su demorada devolución se constató la eliminación de archivos. Al respecto, manifestó que “*hubo una clara maniobra de borrado de información*”, que hubiese obturado el trabajo de inspección si no fuese porque B. tomó el recaudo (no conocido por los auditados) de resguardar los archivos crudos.

Recordó que fue él el primero en advertir la discordancia entre las biometrías registradas por el instrumental de medición y las entregadas por la empresa, que coincidían en sus ejes *X* e *Y* pero diferían en el eje *Z*, que corresponde a la altura sobre el nivel del mar, diferencia que se extendía durante todo el plano. Además, ante la pregunta de una defensa sobre cómo le constaba que los datos obtenidos correspondían a perfiles previos y no a otra medición de terreno, explicó que los archivos se llamaban “*prebios*”. Y fueron modificados después. Esto se constató en la instrucción, con la observación de los contenidos pertinentes.

Por su parte, B. detalló la práctica de medición de la base de asiento y su *expertise* en la materia. Relató que fueron recibidos por Mardiza y que cuando se le solicitó el equipo de medición de la empresa les fue entregado el GPS. Explicó su intervención en la inspección, cómo realizó la descarga de los archivos crudos y que logró a transformar algunos de ellos antes que le retiren el aparato; dio cuenta del procedimiento ejecutado y respaldó su validez técnica.

Además, se exployó sobre la secuencia en la cual les fue quitado el GPS en

---

Fecha de firma: 10/04/2025

Alta en sistema: 15/04/2025

Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO JOSE BOICO, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: GASTON GONZALEZ MENDONCA, SECRETARIO DE CÁMARA



#39611682#451328730#20250410125626815

# *Poder Judicial de la Nación*

medio de la operación, la mora en su devolución y el borrado de las mediciones (con excepción de aquellas que había logrado transformar). Sobre este evento, dijo que le causó sospechas y que su pensamiento fue que si nada tenían que ocultar, no hubiesen borrado los archivos.

Ratificó que resultaba imposible que existiese una coincidencia en las coordenadas *X* e *Y* pero no en la base de asiento (coordenada *Z*), con lo cual era “*evidente que alteraron la cota 0*”. También recordó de modo “*patente*” que el nombre de los archivos descargados era “*prebíos*”, ratificando que las mediciones obtenidas correspondían a tal concepto y no a otro estado del terreno.

El Ing. López no participó de la auditoría, pero fue quien la ordenó y recibió sus resultados. Explicó que Hiriart integraba una coordinación de inspecciones recientemente conformada, que hacía de nexo entre las obras y Casa Central, y que en este caso se le encomendó contrastar si las mediciones eran consistentes con los certificados.

Marcó como una gran inconsistencia que cuando se le pidió al supervisor de obra la documentación, éste se la tuviera que pedir a la empresa. Dijo recordar que a los inspectores no les dieron toda la información en el momento oportuno, pero luego se la terminaron facilitando, aunque había datos que ya no estaban. Avaló el procedimiento de la inspección, explicando que el único control posible es una muestra de un instante de la obra, el último conocido, que en este caso refería al mes anterior (refirió a la dificultad de saber qué ocurrió con una obra una vez que se comenzaron los trabajos). Por ello, se tomaron los últimos datos del equipo de medición, hallándose una diferencia entre ellos y los datos utilizados para la certificación.

Detalló que la diferencia excede por mucho el margen de error previsible para equipos con ese nivel de precisión (+/- 1 cm) y resaltó lo improbable que resulta medir idénticas coordenadas *X/Y* dos veces. También calificó las visitas del BID como protocolares y, por ende, ineficaces para detectar esas inconsistencias. Además, ante preguntas de la defensa, refirió al episodio del suelo

USO OFICIAL



suelto, a cuán usual es encontrar la obra en tal estado y en cómo ello repercute para realizar una nueva medición sobre la base de asiento.

A López también se le preguntó por la actuación del organismo vial posterior a la recepción del informe de auditoría y explicó los cursos de acción que se pusieron en marcha a partir de los hallazgos. Refirió que el informe era “*serio*” y que se tomaron acciones decisivas: se lo elevó al área de transparencia (lo que derivó en la denuncia penal), se separó de la obra a los funcionarios sospechados y, como medida preventiva, se emitió una circular con alcance a todo el país a fin de reconfigurar el procedimiento sobre el que habían recaído las irregularidades detectadas (a partir de entonces, todas las mediciones debían informarse, de un modo específico, previo al inicio de las tareas, a fin de poder generarse un control oportuno).

Paralelamente, explicó que la obra continuó su curso, y que el arqueológico integral del estado de obra que se dispuso no se centró en las discrepancias apuntadas por el informe -cuyo contenido no difundió por considerarlo reservado-, resaltando nuevamente la dificultad de efectuar mediciones “*para atrás*”.

En conclusión, los testimonios respaldan buena parte de los hechos controvertidos por las defensas, que previamente encontraban como único sustento el informe y las declaraciones de la Ing. Hiriart. Adicionalmente, la declaración de López exhibe la reacción del organismo al hallazgo de la inspección y la importancia que se le dio al tema, de modo que no corresponde asignarle al argumento de la presunta convalidación de actos posteriores por parte del Estado el carácter dirimente que los apelantes pretenden.

(3) Otro tanto debe decirse sobre otra prueba novedosa, que ha modificado relevantemente el panorama que antes existía en la causa. Se trata de la extracción de información de equipos electrónicos incautados en allanamientos, que previamente era desconocida. Aquellos datos condujeron, desde variados ángulos, a confirmar las sospechas sobre la existencia de las maniobras reprochadas.

Así:

---

Fecha de firma: 10/04/2025

Alta en sistema: 15/04/2025

Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO JOSE BOICO, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: GASTON GONZALEZ MENDONCA, SECRETARIO DE CÁMARA



#39611682#451328730#20250410125626815



# *Poder Judicial de la Nación*

USO OFICIAL

Lo primero a destacar tiene que ver con conversaciones mantenidas en días cercanos a la auditoría entre G., jefe de obra del tramo de P. SA, y R., que integraría la compañía en una jerarquía superior. En una de ellas, el día previo a la inspección, el segundo le avisa que se produciría la inspección y G. responde que ya estaba al tanto. Después, R. le ordena borrar de las computadoras toda información relativa al volumen de terraplén.

Como se ve, existe una notoria coherencia entre la lógica que siguieron los diferentes acontecimientos objeto del caso y cuanto se confirmó a través de las referencias directas que exhiben las conversaciones.

Lo mismo exhiben diversos mails entre Gabriel Losi con R. y otros técnicos de su empresa, que lo muestran directamente involucrado en la gestión de los certificados de obra, la consolidación de suelos, construcción de terraplén, determinación de cotas, el proyecto de revisión de puentes, etc.; o exhiben un trato asiduo con Crisci (p. ej., uno en el que se habla de que Losi y Crisci discutieron “*el plan de trabajos*” y que el primero quedó en presentarle una “*propuesta conservadora*”, a lo que el segundo le advirtió la cantidad de suelo que debían mover; de que “*lo urgente*” es “*el tema de los terraplenes*”; y de “*malestar*” con el “*tema de la consolidación de suelo*”).

Finalmente, también se halló una cadena de correos con integrantes de la firma P., donde Losi habla sobre evaluar “*cantidades con varias alternativas*” y aclara que “*habrá que acordar qué cota de terraplén genera la necesidad de reemplazo*”, a lo que un integrante de la otra firma responde que “*tenía acordados los precios y faltaban definir el área y profundidad a intervenir*”.

Otros indicios en análogo sentido surgieron del teléfono de G.. En una conversación, R. le reenvía un audio de una persona que lo convoca para hablar y le pregunta si tiene idea qué quiere, contestando G. que debe querer que “*le mejoren el precio del terraplén*”; en otras hablan de “*truchar*” una prensa y de “*inventar*” ensayos.



También los mensajes del *chat* con B. apoyan la hipótesis delictiva. En una ocasión, G. le menciona que removieron a Crisci y que serán supervisados por otro equipo; B. pregunta el motivo y pronto se corrige y le indica: “*mejor dicho, le dijeron por qué?*”, lo que sugiere que el interés era específicamente en conocer cuánto le habían revelado desde Casa Central.

En otra, B. le solicitó los números de volumen de terraplén (*eco r19*) de noviembre (es decir, aquellos en los que se habría detectado la falsedad) y G. se los envía aclarando “*estos son los números que tengo yo*”. Más directos son los mensajes de G. con M. P., a quien le informa que necesita “*lo de viales DNV Córdoba. Es 30*” y que va a “*necesitar \$10.000 para el laborista de la DNV, para tranquilizarlo y que no siga rompiendo las bolas*”, todo lo cual es consentido por el Presidente de la empresa.

#### (4) Sigamos.

En el procesamiento se insistió con que los funcionarios públicos Guillermo Crisci y Fernando Darío Mardiza -a través de las firmas INAC Consultores S.R.L. y M y C Servicios S.A.S., respectivamente- recibieron diversos pagos, provenientes de L. P. P. S.A. y Luis Losi S.A., en concepto de “retornos” por los aportes realizados en la maniobra defraudatoria.

Esto, según la lógica de la investigación, está estrechamente vinculado a la acreditación de esta última operación. Entonces, la actual corroboración –recién afirmada- de aquella, influye necesariamente en lo atinente a esta parte de los eventos. Y eso, de por sí, ya modifica la situación de incertidumbre que oportunamente observó el Tribunal, cuando encomendó profundizar la investigación al respecto.

Pero hay más.

Los –novedosos- resultados de las pruebas electrónicas han contribuido a fortalecer seriamente las sospechas que se tenían sobre la relación entre privados y funcionarios y los verdaderos alcances de la facturación que se realizó en favor de empresas ligadas a estos últimos. Esto es central, porque hace a



# *Poder Judicial de la Nación*

la acreditación de los lazos que los unían y a la afirmación fundada de una connivencia penalmente relevante entre los diferentes implicados, conforme los roles que les tocó ocupar.

Concretamente, se sumaron al expediente comunicaciones entre Mardiza y G. que lo muestran al frente de las negociaciones relativas a la empresa MyC y de su esposa L.. Ello inclina a sostener que los miembros de la UTE conocían tal situación.

Destacan en esa línea los mensajes del 22/01/2018, cuando el Jefe de obra de P. SA le solicitó al funcionario *“los papeles del que va a facturar el equipo”*; y del 15/2/2018, en el que Mardiza le pidió a G. información para elaborar el contrato.

Los intercambios fueron posteriores a la separación de Mardiza de la obra y se presume que las del periodo previo fueron borradas (al igual que el *chat* con el imputado R., que cumplía idéntico rol que G. pero para Luis Losi SA).

Similar es el escenario en lo relativo a la contratación de la empresa vinculada al funcionario Crisci. Hay nueva prueba producto de la extracción forense del contenido de la computadora que pertenece a Gabriel Losi.

En primer lugar, se destacó un intercambio de *mails* entre Losi y el funcionario, del día 18/04/17 (ocho meses antes de la auditoría), en el que Crisci le explica que *“la relación empresa-proveedores es una relación entre privados, en la cual Vialidad no se debe entrometer”*, a lo que el empresario responde: *“Comprendido. La hacemos igual. ¿Algo en especial de la DNV que estimes comente?”*.

En segundo, un mail entre dos directivos de Luis Losi SA (C. G. y J. R. S.), en el cual Gabriel Losi figura en copia: el primero le pregunta si se avanzó en la cotización del trabajo de revisión del proyecto de puentes y le comparte lo enviado por M. B. (directivo de P.); S. contesta: *“No, lo llamé a Crisci y me dijo que B. estaba en tema. Eso fue todo”*.

USO OFICIAL



Ambas conversaciones son indicativas del involucramiento personal de los implicados con el funcionario y abonan la sospecha de que el trabajo facturado por INAC Consultores fue directamente pautado con Crisci.

Eso no es todo.

De la computadora de Losi surgen otros correos que fueron evaluados. Uno de ellos, de octubre de 2017, revela que en una reunión del día anterior entre integrantes de ambas compañías se discutió un esquema contable para “valorizar ante riesgos de autoría a futuro” el ítem alquiler de maquinarias (concepto del contrato con Mardiza); otro con el Ing. A. sobre la verificación de puentes (trabajo contratado a INAC -Crisci-).

(5) Cabe volver a lo dicho en un principio.

La incorporación de nuevos elementos a la causa permite superar el déficit del cuadro preexistente y afirmar provisoriamente la existencia de los hechos y la asignación de responsabilidades, pues son diversos los indicios que -sumados a la prueba ya existente- refuerzan las sospechas sobre las distintas aristas concatenadas del evento (el falseamiento, el fraude y los sobornos).

No se trata, como se ve, de modificar estándares probatorios que hacen a la valoración de indicios para determinados casos, porque siempre su eficacia a los fines de acreditar determinados acontecimientos históricos depende de *“su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues, por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad”* (CSJN, Fallos 314:346, 300:928).

En definitiva, lo que antes no estaba lo suficientemente probado con arreglo al estándar que fija la ley (art. 306, CPPN), ahora sí lo está, producto de la incorporación de elementos probatorios nuevos y de la encomendada profundización de la instrucción, en aras de cumplir con las metas que impone el art. 193, CPPN.



# *Poder Judicial de la Nación*

Las evidencias reunidas dan aval a la atribución de responsabilidad de quienes debieron velar por el interés estatal (Crisci, Mardiza, L.) y de quienes, en distintos niveles de responsabilidad dentro de las empresas, participaron individualmente de diferentes facetas de los eventos (Losi, P., F.) o ejecutaron en el campo los aportes específicos para su concreción (A., R.).

Lo mismo ocurre con aquellos que realizaron un aporte indispensable para facilitar a los funcionarios sospechados el cobro de los retornos (M., T., L.).

Con todo, se confirmarán los procesamientos.

**III-** En el fallo se procesó también a dos sociedades anónimas (“LUIS LOSI S.A.” y “L. P. P. S.A.”) “en orden a los hechos por los que fueron indagadas, por considerarlas prima facie autoras penalmente responsables del delito de cohecho activo”. Se lo hizo en los términos de la ley 27.401, que estuvo en vigencia durante la comisión de parte de los hechos reseñados más arriba. Se las embargó por \$632.381.436,96.

Nótese que el cohecho está incluido entre los supuestos del art. 1 y que, según el art. 2 (todo de la norma citada), “Las personas jurídicas son responsables por los delitos previstos en el artículo precedente que hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio”. Sólo “quedará exenta de responsabilidad sólo si la persona humana que cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para aquella”.

Al respecto, el juez hizo notar que los mecanismos de control interno -cuya implementación competía al Directorio- no fueron aplicados. Y dio como prueba de ello que “no se exigió más que la documentación básica a las subcontratistas, no se revisaron los contratos en ejecución, no se realizó un análisis de riesgo sobre la contratación de las empresas, no se analizó el perfil de empleados para personalizar las capacitaciones, no se realizaron auditorías y siquiera se formó un sumario interno una vez anoticiados de la presente causa”.

Fecha de firma: 10/04/2025

Alta en sistema: 15/04/2025

Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO JOSE BOICO, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: GASTON GONZALEZ MENDONCA, SECRETARIO DE CÁMARA



#39611682#451328730#20250410125626815

USO OFICIAL

Las comunicaciones frecuentes entre los directivos de las firmas contribuyen también a presumir que no se trató de eventos que no se gestaran y beneficiaran a título exclusivamente personal de las más altas autoridades, sino que hubo un determinado nivel de anuncia y beneficio de la sociedad como tal.

Así, está a priori corroborada la organización defectuosa (esto es, la ineficacia de sus programas de integridad, cuyas pautas habrían sido abiertamente quebrantadas) como la tolerancia de sus órganos (art. 6).

**IV-** En lo que respecta a la medida cautelar de carácter personal, la opción prevista en el inciso d del art. 210 del CPPF aparece como alternativa idónea para la neutralización de riesgos procesales en el caso, dadas la naturaleza y las características de las imputaciones consolidadas. Particularmente, teniendo en consideración que no se trata de una restricción absoluta, sino que permite tramitar la autorización correspondiente, cuya viabilidad deberá ser evaluada en cada concreto. Por tal motivo, y en tanto luce justificada y proporcionada, habrán de confirmarse.

**V.** Finalmente, corresponde tratar la crítica efectuada respecto de los montos de los embargos. Para ello, cabe recordar que la finalidad de las medidas cautelares es asegurar la eficacia práctica de la sentencia que recaiga en el proceso (CSJN, Fallos 314:711) y que su dictado también obedece al deber de los jueces de resguardar, en el marco constitucional, la razón de justicia que exige que el delito comprobado no rinda beneficios (Fallos 254:320; 275:389; 283:66, entre otros).

Bajo tales parámetros, el juez ha establecido sumas que obedecen a los conceptos comprendido por el art. 518 del CPPN (esto es, la pena pecuniaria que corresponda al delito o concurso de ellos, la posibilidad de una indemnización civil y las costas del proceso) y ha tenido en cuenta también la posibilidad de futuros decomisos, de acuerdo a lo establecido por el art. 23 del CP.

Partiendo de esas premisas, no se advierte en el fallo recurrido que los montos asignados a cada caso resulten arbitrarios. Para establecerlos, se

---

*Fecha de firma: 10/04/2025*

*Alta en sistema: 15/04/2025*

*Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: ROBERTO JOSE BOICO, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado(ante mi) por: GASTON GONZALEZ MENDONCA, SECRETARIO DE CÁMARA*



#39611682#451328730#20250410125626815

# *Poder Judicial de la Nación*

tuvieron en cuenta el valor de las multas establecidas en el art 259 bis del CP y en el art. 7, inc. 1, de la ley 27.401, así como la pena accesoria del art. 22 bis del CP, según cada caso; se calculó el resarcimiento civil en función del perjuicio estimado; y se ponderaron las costas a partir de la tasa de justicia y las operaciones forenses realizadas. Asimismo, el cálculo del presunto monto de perjuicio aparece ajustado a las características de los hechos.

En virtud de lo expuesto, tomando en cuenta los parámetros estipulados por los art. 40 y 41 del CP, corresponde concluir que las sumas fijadas se adecúan las pautas de medición aplicables al caso y, por ello, su imposición debe ser homologada.

Así dejamos expuesta nuestra postura.

**El Dr. Roberto José Boico dijo:**

## **I.- Introducción**

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal con motivo de los recursos de apelación contra el auto de mérito dictado por el juez de grado el 14 de diciembre de 2024 interpuestos por la Dra. María Fiorito y el Dr. Matías Moran —en representación de Gabriel Pedro Losi y de Luis Losi S.A.—, el Dr. Gastón M. Avrutin Suárez, —abogado defensor de C. J. M.—, del Dr. Ignacio Zunino —abogado defensor de A. E. A. y C. J. R.—, del Dr. Julián Subias y la Dra. Nicole Hirst —por la defensa de Fernando Darío Ángel Mardiza y de G. T. L.—, del Dr. Sebastián Sal —defensor de J. H. F. y M. P. y de la firma L. P. P. S.A.—, y del Dr. Hernán Jáuregui Lorda —por la defensa de E. L.—.

## **II.- Agravios**

La Dra. Fiorito y el Dr. Moran —por la defensa de Losi y Losi S.A.—, apelaron el procesamiento, el embargo, la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país. Sostuvieron que no se incorporaron los aspectos señalados por la Cámara al revocar el decisorio y que no se realizó el peritaje que propusieron. Por ende, en su entendimiento, no se acreditó la subejecución de la obra. A su vez, indicaron que no se señaló con qué momento de la visita es que no

Fecha de firma: 10/04/2025

Alta en sistema: 15/04/2025

Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO JOSE BOICO, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: GASTON GONZALEZ MENDONCA, SECRETARIO DE CÁMARA



#39611682#451328730#20250410125626815

USO OFICIAL

se condice el certificado supuestamente falso, dado que durante el transcurso de la inspección se rellenó la base de asiento, y esto, según la defensa, implicaría que se intentó de corregir la subejecución. Agregaron que si Luis Losi S.A. hubiera especulado con un mejor rédito económico no hubiera adquirido el equipo GPS “... *de última generación y alto costo*” y “*hubiera ejecutado la obra con las herramientas obligatorias según el pliego*” y que esto demostraría “*no sólo la inexistencia de una búsqueda de ahorro, sino también –y por el contrario- la intención de realizar una obra lo mejor posible, sin ahorrar costos*”. También indicaron que el instrumento oficial de medición es la Estación Total y no el GPS, que éste último era un instrumento de la contratista, y las mediciones debían ser efectuadas con el instrumento oficial de medición de la obra. Agregaron que, entonces “*toda la hipótesis acusatoria...se basa en un procedimiento contrario a la reglamentación aplicable*”. Además, indicaron que la presencia de suelo suelto implicó que el estado final del terraplén sería uno que no se midió. Y, por este motivo, incluso si fueran correctos los datos obtenidos del GPS, no podían ser comparados con el certificado de obra, porque no eran los del terraplén existente cuando Hiriart hizo su informe. Por otro lado, indicó que a Losi se le atribuyó una responsabilidad meramente objetiva y que la conversación entre Crisci y Guzmán Arguello refiere a otra obra.

A su turno, el defensor de F., P. y L.P. P. S.A., —el Dr. Sal—, recurrió los puntos VI, VII, X, XI, XII, XII y XIV, en cuanto resolvieron el procesamiento, la prohibición de salida del país, el embargo y la inhibición general de bienes. Refirió que el cuadro probatorio no había variado desde el auto de mérito revocado. Sin perjuicio de ello, subrayó que el subtramo donde se detectaron irregularidades era aquel en el que trabajaba la empresa Luis Losi S.A. y que Hiriart manifestó que no podía afirmar si en la Estación Total entregada en el obrador de L.P. P. se habían eliminado datos. Asimismo, dijo que sus defendidos no conocían la relación entre L. y Mardiza y MyC, y que la contratación fue legítima. Refirió





## *Poder Judicial de la Nación*

que la ley 27.401 no se encontraba vigente al momento del hecho, por lo que no puede ser aplicada.

Por su parte, el defensor de M. —Dr. Suárez— apeló los puntos dispositivos V, X, XI y XIV del auto de mérito —esto es el procesamiento, la prohibición de salida del país, el embargo, la inhibición general de bienes y el rechazo de las medidas de prueba requeridas—. Sucintamente, señaló que no fueron despejados los interrogantes sobre los cuales se revocó el procesamiento previamente. A su vez, manifestó que la transferencia de INAC fue legítima y que se realizó antes de la licitación de la obra. Indicó que las facturas emitidas en favor de T. y F. C. (esposa e hijo respectivamente de Guillermo Crisci) correspondieron a servicios profesionales efectivamente prestados.

Por su parte, la defensa de A. y R. —Dr. Zunino—, apeló el procesamiento, el monto del embargo y la prohibición de salida del país. Indicó que ambos son técnicos y que realizaron de manera correcta su trabajo. Refirió que no se probó que haya existido una subejecución en la obra y que no existía peritaje alguno que demuestre lo contrario. Manifestó que el Juez de grado no sumó elementos probatorios y que el accionar posterior de la Dirección Nacional de Vialidad en la obra, convalidaba el trabajo que se había realizado previamente. Afirmó que, de la existencia de suelo suelto, se desprendería que los datos por la Ingeniera obtenidos no se condecían con la base de asiento. Además, expuso que la Dirección Nacional de Vialidad, en el momento que Hiriart presentó el informe, pudo haber hecho una nueva medición con la Estación Total, instrumento establecido por el pliego.

A su vez, los defensores de Mardiza y L., —Dr. Subías y Dra. Hirst—, impugnaron los puntos II, V, X, XI y XII, que dispusieron el procesamiento, la prohibición de salida del país, el monto del embargo y la inhibición general de bienes. Aseguraron que no se habían satisfecho las cuestiones que señaló la Cámara para revocar el anterior procesamiento. Agregó que Mardiza solo tenía un rol técnico. Expresó que no solo no se corroboró la eventual

USO OFICIAL



defraudación, sino que tampoco se acreditó que los certificados de avance de obra sean falsos ni que la contratación de máquinas viales sea el reflejo de un pago espurio.

Por último, el Dr. Jáuregui Lorda, abogado defensor de L., impugnó los puntos III, X y XI, que dispusieron el procesamiento, la prohibición de salida del país y el embargo, respectivamente. Sostuvo que a éste se le atribuyó una responsabilidad meramente objetiva y que no se le atribuyó ninguna conducta específica, que no se demostró cuáles fueron los certificados falsificados, que ninguno de los retornos referidos fueron en favor de L. y que éste desconocía el contenido del GPS porque era de la contratista.

### **III.- Antecedentes relevantes de la causa**

Corresponde señalar que esta es mi primera intervención en la causa. Si bien no volveré sobre lo que ya fue resuelto, repasaré algunas cuestiones que son necesarias para lograr una acabada comprensión del hecho investigado en general, y de aquello que se produjo de manera novedosa en particular.

Esta causa tuvo su origen en la presentación realizada por el Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Alfredo Iguacel el día 18 de diciembre de 2017. En aquella, denunció dos hechos que habrían ocurrido en el marco de la ejecución de obras viales en la Ruta Nacional N° 8 y la Ruta Nacional N° 19.

a. Con respecto a la Ruta Nacional N° 8, manifestó que M. S. y R. D. I. —de la Unión Temporal de Empresas R. C.-P. contratistas en la obra del tramo Pergamino-Fontezuela de la Ruta Nacional N° 8— se entrevistaron con Diego Martínez —Jefe de la Unidad de Ética y Transparencia— y M. P. —Asesor Legal, Técnico y Administrativo—. Entonces, manifestaron que el supervisor de sus tareas —Ruben Carpintero— ponía trabas a la obra y solicitaron a las autoridades “*que se analice lo que sucede en la obra a fin de verificar si existen intenciones de inducirlos a celebrar alguna clase de acuerdo ilegal*”.



## *Poder Judicial de la Nación*

USO OFICIAL

b. Sobre los hechos en la Ruta Nacional N° 19, puntualmente en el Tramo III —en esta primigenia denuncia—, manifestó Iguacel que el 19 de octubre de 2017, la Dirección Nacional de Vialidad recibió la Nota Interna N° 19 por parte del Ingeniero Agustín Guzmán Argüello —Supervisor de Gestión—. En aquella misiva, Guzmán Argüello plasmó una conversación que tuvo el 14 de septiembre de 2017 con Guillermo Duilio Crisci —Coordinador Ejecutivo de la Dirección de Obras de Casa Central de la Dirección Nacional de Vialidad—. En esa conversación, Crisci le dijo que iban ***“a bajar los perfiles de la base de asiento”*** porque iban ***“a ganar plata con esta diferencia de terraplén”***, frente a lo que Guzmán Argüello manifestó su negativa. Crisci insistió, le dijo que se iba ***“a llenar de plata”*** y que ***“o lo hacemos todos o no lo hace nadie”***. A su vez, le dijo que él lo había entrevistado, que confió en él y que por eso trabajaba en Vialidad. Agregó que le dijo ***“...[a]sí como te puse, te saco. Bajamos los perfiles y nos repartimos la plata entre C. (Topógrafo del equipo de Supervisión C. S.), vos y yo”*** (el resaltado me pertenece).

Luego, relató Guzmán Argüello que se subió a la camioneta M. S. —Encargado de Obra por parte de CRZ Construcciones S.A.—, a quien Crisci le indicó ***“Bajá lo máximo que puedas, unos 0,20 metros antes del agua. Si viene alguna visita, tapás todo y listo”*** (el énfasis me pertenece). Guzmán Argüello continuó su exposición en la nota de referencia, expresó que se retiraron y Crisci le preguntó si J. A. —Supervisor de Calidad del Tramo III de la Ruta Nacional N° 19— tenía los perfiles previos con los que hacen la medición. Frente a la respuesta afirmativa de Guzmán Argüello, Crisci manifestó que los perfiles de la base de asiento y de terraplén los tenían que manejar únicamente él y C. y que ***“J. A. no tiene que meterse. No hablés más con A.. Es una orden”***. Seguidamente llamó a C. S. y le dijo que ***“...los perfiles los tienen que manejar entre Agustín y vos. **Sabés cómo es esto. Las mediciones las hacen ustedes y nadie más**”*** (el resaltado me pertenece). Luego de cortar por teléfono, Crisci volvió a insistirle a Guzmán Argüello que las mediciones las debía manejar solamente junto con C..



c. El 1° de febrero de 2018, I. amplió la denuncia primigenia, y expuso un tercer hecho que habría ocurrido en el Tramo II de la obra vial de la Ruta Nacional N° 19 —misma obra vial en la que, en el marco del Tramo III, Crisci le habría indicado a Guzmán Argüello que debía bajar los perfiles de la base de asiento para “ganar plata”—. En aquella ampliación, indicó que integrantes de la Unidad de Supervisión advirtieron irregularidades en una visita a la obra vial. En este sentido, se refirió a un informe elaborado por la Ingeniera María Agustina Hiriart en ocasión de aquella visita e hizo hincapié en los puntos coincidentes con los hechos denunciados originariamente, respecto del “...*posible falseo o manipulación de las mediciones de ‘los perfiles de la base de asiento y volúmenes de terraplén’*”. Así, resaltó que se trataba de la misma obra vial en la que sucedieron los hechos que motivaron la denuncia y que solo se trataba de “...*un tramo distinto de la misma Ruta Nacional*”. A su vez, destacó que existía una “[p]erpetuación de una maniobra similar a la proyectada en la denuncia...*que existía una disparidad entre los datos arrojados en la memoria del GPS de la empresa...y las planillas que el Jefe de Obra de Losi SA, les había entregado...Asimismo existe una diferencia entre estas mediciones y las que finalmente se certificaron*” (el resaltado me pertenece). Manifestó que esto podría “*podría presentar un claro paralelismo, a lo que el Ing. Crisci intentaba realizar en el Tramo III de la misma Ruta, es decir la alteración dolosa de las mediciones de los perfiles previos, para luego certificar trabajos que no fueron realizados*” (el énfasis me pertenece).

El informe —adjunto a la denuncia— se encuentra suscripto por la Ingeniera María Agustina Hiriart —Integrante de la Unidad de Supervisión de Obras— que estuvo a cargo de la visita y por el Ingeniero Mariano A. López —Coordinador de Obras de la Dirección Nacional de Vialidad—. Durante la visita, acompañaron a Hiriart en la visita G. A. y O. B. —agrimensor—, ambos pertenecientes a la sección Tierras del 2° Distrito (Córdoba).

Del informe, surge que la visita fue llevada a cabo en diciembre de 2017 —puntualmente los días 21, 22, 26, 27, 28 y 29— y que el equipo de la



# *Poder Judicial de la Nación*

USO OFICIAL

Dirección Nacional de Vialidad encargado de la Supervisión de Obra estuvo compuesto por el Supervisor de Gestión de Obra —Fernando Mardiza—, el Supervisor de Gestión de Calidad —A. S.—, un Topógrafo —E. L.— y dos laboratoristas —J. B. y N. J.—. Especificaron que la empresa contratista encargada de la ejecución de la obra era la Unión Temporal de Empresas L. P. P.-Luis Losi, cada una de las cuales contaba con su propio obrador y se encontraban, la primera, trabajando desde la progresiva 0-28 y, la segunda, desde la progresiva 28 al final. Detallaron que el Jefe de Obra por L.P. P. era D. G. y que el Jefe de Obra por Luis Losi era C. R., y que el Representante técnico por ambas empresas era A. A..

Veamos ahora, puntualmente, la descripción de lo sucedido en aquella inspección.

El 21 de diciembre de 2017 se presentaron en el Obrador de Luis Losi S.A. y le solicitaron a A. S. —Supervisor de Calidad— y a Fernando Mardiza —Supervisor de Gestión de Obra— diversa documentación. Entre lo solicitado, se encontraba información relativa a los perfiles previos. Se le consultó a Mardiza sobre el proceso y los equipos que utilizan para la determinación de los perfiles previos, quien indicó “**...que para la determinación de los perfiles previos y la base de asiento participaban Empresa y Supervisión con GPS de la empresa (Luis Losi S.A). Comentó que la empresa (Luis Losi S.A) contaba con GPS y Estación Total, esta última utilizada para el corte de cancha y control de estabilizado, y que la Supervisión contaba con Estación Total pero que no la usaban prácticamente**” (el resaltado me pertenece).

A continuación, los perfiles previos de la zona en la que trabajaba la empresa Luis Losi S.A. fueron entregados por R. —Jefe de Obra— desde su computadora en versión digital. Por su parte, L. —Topógrafo de la Supervisión de Obra—, le entregó las “*Planillas de nivelación (Losi-Luis) Previo-Obra*” en formato papel, de las que no se pudo realizar una evaluación exhaustiva “*...puesto que en cada sección aparece la cota del eje y luego de algunos puntos a ambos lados, pero en la mayoría de los casos sin indicarse la distancia al eje*”.

Fecha de firma: 10/04/2025

Alta en sistema: 15/04/2025

Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO JOSE BOICO, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: GASTON GONZALEZ MENDONCA, SECRETARIO DE CÁMARA



#39611682#451328730#20250410125626815

Seguidamente, le solicitó al Supervisor de Gestión de Obra —Mardiza—, los equipos de medición de la empresa con certificado de calibración. Una vez que le entregaron el equipo de medición GPS, comenzaron a descargar los datos que éste contenía a su computadora y pasarlos a archivos txt. para poder trabajar con ellos en el programa “Civil Autocad”. Sin embargo, mientras descargaban los datos, L. les dijo “...**que necesitaba ir a replantear una alcantarilla y el Jefe de Obra de Losi llamó al Supervisor de Gestión de Obra para que devolvamos el GPS**” (el resaltado me pertenece). Así, informó Hiriart que se lo entregaron y coordinaron que “...**a las 17 hs íbamos a volver al obrador para seguir con el trabajo**” (el resaltado me pertenece). Sin perjuicio de esto, dejó asentado Hiriart que para ese entonces habían logrado descargar a su computadora la totalidad de los archivos en crudo existentes en el GPS. Según detalló, descargaron “...**todos los archivos en jobs (datos ‘crudos’: 74 archivos) y solo pasar a txt 23 archivos**” (el resaltado me pertenece).

Entre tanto, visitaron el obrador de L.P. P., donde consultaron con G. —Jefe de Obra— cuestiones relacionadas a la medición de perfiles previos. Éste último les dijo que ellos tomaron perfiles previos y luego fueron borrados. Manifestaron que la información existente no era relevante.

Luego, y tal como habían acordado, a las 17:00 horas regresaron al obrador de Luis Losi S.A. y solicitaron al Supervisor de Gestión de Obra el GPS en cuestión, sin embargo les manifestaron que lo habían llevado a una obra en la Ruta Nacional N° 34.

Al día siguiente, el 22 de diciembre, al acceder a la información del GPS encontraron que en el mismo había “...**solo 23 archivos jobs (los mismos que habíamos logrado pasar a txt), faltando los 51 archivos jobs que no habíamos alcanzado a convertir el día anterior debido al requerimiento del equipo. Pasamos los 74 archivos jobs a txt y comenzamos a analizar los datos**” (el énfasis me pertenece).



# *Poder Judicial de la Nación*

A continuación, explicó que “[d]ibujamos los perfiles previos tomados del GPS (información cruda que ni la Supervisión de obra ni la empresa sabe que tenemos) y los comparamos con los perfiles previos que el jefe de obra de Losi entregó de su computadora...la diferencia de (norte, este) en todos los casos da 0 (lo que nos indica que la comparación se está realizando en el mismo punto) y la diferencia de cota en el centro de perfil se encuentra en todos los casos entre (-14 cm) y (-30 cm)” (el resaltado me pertenece).

A continuación, Hiriart plasmó en el informe que hizo un resumen de la información obtenida en transversal de la progresiva 44+300 y tomó, para esto, como archivo de base la nivelación de la Empresa Losi en el mes de noviembre. Señaló que **la base de asiento tomada para la certificación difería de los datos que se habían encontrado en el GPS.**

Asimismo, informó que solicitaron a Mardiza los perfiles previos de la progresiva 53+050,00 a la progresiva 57+804,66 y que, al no contar con estos datos, se los solicitaron al Jefe de Obra de Losi —R.—. Este último dijo que tampoco tenía esa información pero que la enviaría por correo electrónico, sin embargo, el 28 de diciembre le envió un correo que contenía datos relativos a la nivelación de bases de asiento pero no de perfiles previos, como fue solicitado.

Seguidamente, relató que el 26 de diciembre volvieron a la obra a realizar un relevamiento de la traza desde la progresiva 43+200 hasta el final. Explicó que el objetivo del trabajo era, además, tomar cotas en zonas donde aún no habían comenzado con las tareas de terraplén para poder, así, compararlas con las obtenidas de las bases de asiento entregadas por la Supervisión y con los datos del GPS. En este sentido, remarcó: “*Como se puede observar en las planillas de avance de obra y en el certificado del mes de noviembre desde la progresiva 44+450 hasta la progresiva 46+650 no hay certificado terraplén, por lo que nos tendríamos que haber encontrado con la base de asiento. Pero la situación fue otra, nos encontramos en esa zona con una gran cantidad de suelo suelto, el que no se estaba ahí hasta que nos volvimos el viernes 22 de Diciembre*” (el énfasis me

USO OFICIAL



pertenece). A continuación, dijo que en una recorrida por obra con S., éste le comentó que la empresa le pedía la certificación de suelo sin compactar.

Por otro lado, plasmó en el informe que el 21 de diciembre encontró “...*que entre las progresivas 3+000 a 3+650 (zona donde trabaja L.P. P.), en ambas calzadas a nivel de subrasante, se había colocado una mezcla no homogénea de suelo negro y suelo rojizo, la que se podía advertir que no cumplía las especificaciones técnicas para el suelo a utilizar en los 30 cm superiores del terraplén*” (el énfasis me pertenece).

Al prestar declaración testimonial, Hiriart explicó que los perfiles transversales “...*son archivos del programa AutoCad a partir de mediciones tomadas con un GPS o estación total*” y que estos **se realizan mensualmente** “...*entre un representante de la empresa y uno de vialidad...y se presentan en los certificados de obra que la empresa presenta mensualmente para cobrar lo que hubiera ejecutado*” (el resaltado me pertenece). Luego, especificó que los **perfiles transversales grafican** “...*la altura sobre el nivel del mar...el perfil marca la base de asiento sobre el que después se construye. Después los perfiles van graficando cuánto volumen de terraplén se va ejecutando*” (el resaltado me pertenece). Luego de estas especificaciones técnicas, ratificó todo lo informado y especificó algunas cuestiones que permiten robustecer aquello. Explicó que “...*Los GPS guardan el registro de las mediciones tomadas en crudo, para modificarlas hay que bajar la información a una computadora y volver a cargarla al GPS...B....bajo todos sin transformar y después empezó con el trabajo de transformación*”. Que luego de tres o cuatro minutos L. les pidió que devuelvan el GPS, ella avisó que volvería a las 17:00 horas y que en el mientras tanto, iría al al obrador de L.P. P. S.A. Expresó que, seguidamente, le solicitó los perfiles transversales de todos los meses y Mardiza le dijo que no los tenía pero que le daría unas hojas niveladas, sin embargo, señaló que “*no tenían ubicado exactamente el punto de cada cota entonces no hay forma de hacer la comprobación*” (el





# *Poder Judicial de la Nación*

resaltado me pertenece). Mardiza le indicó que también le solicitara los perfiles transversales a la empresa, por lo que se los solicitó a R., quien le entregó un GPS.

Luego detalló que en el obrador de L.P. P. le entregaron los perfiles transversales en papel y en pendrive. Indicó que G. —jefe de obra— bajó en ese pendrive “...*lo que había en su computadora, de perfiles transversales, y bajamos lo que había en la estación total (es un instrumento de medición, al igual que el GPS), pero no había mediciones de perfiles transversales. No es posible afirmar si se borró información o si nunca hubo. Es decir que no hay forma de comparar perfiles transversales informados con las mediciones reales que se hayan tomado por que no había información en la estación total*” (el resaltado me pertenece).

En el horario acordado, a las 17 horas, regresaron al obrador de Luis Losi S.A. y solicitó el GPS a R. y a Mardiza, quienes le dijeron que lo habían llevado a otra obra en la provincia de Santa Fe. Luego expresó que “[a]l otro día me dieron el GPS...*sólo habían dejado en el GPS los datos que habíamos logrado transformar*” (el resaltado me pertenece). Seguidamente, refirió que cuando transformaron toda la información, y si bien no pudo comprobar las mediciones con las planillas que le dio Mardiza por lo que explicó previamente, sí pudo comprobar que no concordaban los perfiles que habían logrado dibujar a partir de los datos del GPS y que “[e]n promedio la base de asiento tomada a partir de los datos del GPS *estaba 17 cm. más arriba que la base de asiento a partir de la cual se realizó la certificación...*” (el resaltado me pertenece). Seguidamente, agregó “Hay algo más: *eso fue un viernes...y el lunes volví. Antes de irme, había tramos de la obra donde no había suelo cargado sobre la base de asiento, entonces podría haber tomado las mediciones con el GPS que habíamos llevado nosotros. Pero cuando volví estaba toda la obra con suelo cargado sin trabajar, o sea estaba tapado. Entonces ya no se podían tomar las mediciones. Me refiero al tramo a cargo de Luis Losi S.A.*” (el énfasis me pertenece).

USO OFICIAL



En su segunda declaración, dio especificaciones técnicas de algunos términos utilizados en el informe. Explicó que *cota* es la *altura* que hay desde la *base de asiento* —terreno desde el que se comienza a rellenar hasta llegar a la altura necesaria para la ruta— y que *perfil previo* es la altura hasta la base de asiento. Y el relleno desde la base de asiento hasta la ruta es lo que conforma el volumen del terraplén. A su vez, explicó que **los perfiles previos no son “algo físico”** sino que son medidas que se toman por secciones transversales —cada 25 metros— con el GPS, **y que esto no queda marcado**. Por esto, explicó, no es posible saber la medida de un perfil previo luego de realizada la ruta, que en tal caso, solo se podría hacer un cateo, que “*consiste en...hacer un pozo, y sacar muestras de los diferentes extractos de suelo...En un momento te vas a dar cuenta que el suelo cambió de características*” pero que, igualmente, es difícil de comprobar. Agregó que también se podría enviar a un geólogo a que realice un estudio del suelo “*...también cada cierta distancia y ahí te saca el perfil del suelo y ahí sabés qué características tiene el suelo para abajo*”, pero afirmó que en este caso en particular, es difícil determinar con exactitud el suelo previo y el que se rellenó, debido a que la diferencia que ella notó era de entre 14 y 30 centímetros.

A su vez, aseveró que la base de asiento es necesaria para determinar la magnitud que efectivamente tuvo una obra y que esos datos solo se pueden obtener de la medición realizada por el GPS. Explicó que en los certificados de obra se plasma lo que presenta la empresa constructora, verificado por el Inspector de Vialidad y que esto refleja, “*la base de asiento y con lo que va llenando cada certificado cada mes. Cada mes tenés que hacer un relevamiento para ver cuál es la altura existente, la comparás con la base de asiento y la vas certificando*” **que en ello fue que notó diferencias de altura, entre los datos que descargó del GPS y los datos que estaban certificados**. A su vez, dijo que la información que surge de las “planillas de liberación previo obra” es lo mismo que se certifica, que son firmadas tanto por la Empresa constructora como por Vialidad y que ahí deberían estar las base de asiento/perfiles previos.

---

Fecha de firma: 10/04/2025

Alta en sistema: 15/04/2025

Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO JOSE BOICO, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: GASTON GONZALEZ MENDONCA, SECRETARIO DE CÁMARA



#39611682#451328730#20250410125626815

# *Poder Judicial de la Nación*

Es necesario aclarar en este punto que tal como surge de los actuados, los certificados de avance de obra presentados mensualmente ante la Dirección Nacional de Vialidad por el Tramo II de la Ruta Nacional N° 19 fueron suscriptos por A. E. A. —representante técnico de la UTE—, Fernando Mardiza —Supervisor de Gestión de Obra— y A. S. —Supervisor de Calidad—, A. S..

## **IV.- Los elementos probatorios novedosos**

Corresponde ahora detenerse en los elementos probatorios con los que no contaba el Juzgado de primera instancia al dictar el auto de mérito que, luego, fue revocado por mis colegas. Esto tiene principal trascendencia dado que las defensas coincidieron en plantear que aquello que fue señalado como carencia probatoria para poder confirmar el procesamiento, no se encontraría aquí satisfecho. Veamos.

Me refiero, entonces, a las declaraciones testimoniales de O. B., G. A. y Mariano López —que coincidieron en todo aquello que fue informado y relatado por la Ingeniera Hiriart— y a la información recabada de los dispositivos electrónicos secuestrados —que robustecieron la hipótesis acusadora—.

### **1. Comencemos por las declaraciones testimoniales.**

**a. Testimonial de A. O. B. —Agrimensor—.** Relató lo que sucedió al llegar a la obra y fue coincidente con el informe y las testimoniales de Hiriart. Sobre la descarga de datos del GPS, explicó que al conectarlo a su computadora se lo reconoció como un dispositivo externo, como un pendrive, pero no podía procesar los datos, entonces *“copié todo y después quise transformar y no se transformó, entonces desconecté la colectora y comencé a transformar manualmente uno por uno”*. Dijo que interrumpieron su tarea y le pidieron el GPS, y que al día siguiente, cuando tuvo acceso nuevamente, éste contenía únicamente los archivos que había logrado transformar —coincidió en todo con lo informado y declarado por Hiriart—. **Manifestó que esta circunstancia le pareció sospechosa porque si no hubiera nada que ocultar, no había motivos para eliminar información.** Expuso que Hiriart le preguntó qué había pasado y él le respondió



que los archivos tenían la siguiente particularidad: *“que la diferencia entre X y X era cero, entre Y e Y, es cero, si los dos archivos se suponen iguales, Z menos Z, tendría que ser cero, pero no era cero”* y que entonces le advirtió a Hiriart que *“medir dos veces con la misma precisión en igual coordenadas es imposible... es evidente que alteraron la Z”* (el énfasis me pertenece). Explicó que si se mide con un aparato un punto y da una coordenada, cuando se vuelve a medir, no va a dar exactamente la misma coordenada, que puede coincidir un punto, pero no muchos de ellos.

Sobre la exactitud de los datos del GPS utilizado, manifestó que tienen una precisión de más/menos uno o dos centímetros y que permiten una buena calidad de medición.

**a. Testimonial de G. R. A..** Manifestó que asistió a la visita de obra únicamente como apoyo del Agrimensor B.. Respecto de cómo sucedieron los hechos en el obrador con el GPS, coincidió con lo informado y declarado por Hirart y por B.. Manifestó que se dio cuenta que había “algo raro” con las mediciones, dado que *“todos los puntos representaban una alteración en el Z, eso se daba en todos los puntos, no era en algún lugar puntual era en toda la superficie del Tramo...”*. Agregó que, a su entender hubo *“...una clara maniobra...se borró información...había información que estaba el día anterior y no estaba al día siguiente”* (el resaltado me pertenece). Además, afirmó que si no hubieran resguardado los datos no hubieran podido continuar con su trabajo, porque no hubieran tenido acceso a la información eliminada del GPS.

**c. Testimonial del Ingeniero Mariano López.** Manifestó recordar que la información solicitada por Hiriart fue dada de manera retaceada y que no le fue dada en el momento oportuno. Explicó también cómo se realizan estas auditorías, y que al recibir un informe de estas características se debía elevar al área de Transparencia de Vialidad Nacional, y eso fue lo que se hizo. A su vez, dijo que esta obra fue financiada por el préstamo de un organismo mundial de créditos y que las fiscalizaciones fueron delegadas a la Dirección Nacional de Vialidad.



# *Poder Judicial de la Nación*

Seguidamente, Lopez explicó que luego de la visita de obra de Hiriart se designó un nuevo equipo a efectos de continuar con la inspección de la obra, pero no para repetir las mediciones realizadas anteriormente, sino para poner en valor todo lo que se podía medir, dado que ***“no todo es medible todo el tiempo, porque las obras son dinámicas...”*** (el énfasis me pertenece).

A su vez, explicó que él no fue parte del final de la obra, que del único hito que participó fue cuando cambiaron la inspección y que ésta nueva tuvo, de ahí en adelante, todos los recaudos, pero que ***“de ahí para atrás lo único que hace, es verificar en papeles, no tiene forma de hacer corroboraciones de campo de lo que se fue haciendo en el mes a mes”***. Relató que luego del informe de Hiriart siguieron con la obra ***“y dejar[on] eso para que quien tenga que analizar lo detectado...la nueva inspección que vino hizo todo el relevamiento de lo visible y posible y continuamos”***. Por otro lado, a raíz de las irregularidades informadas por Hiriart, generaron ***“una circular de Vialidad Nacional que era complementaria de lo que exigen los pliegos para la mediciones, indicándole a todas las inspecciones del país...que todas las mediciones debían venir antes de iniciar las tareas, que la medición previa es la base para la medición final...”***.

2. Continuemos ahora con las conversaciones que se hallaron en los equipos electrónicos secuestrados en los allanamientos realizados. Veamos.

El 15 de septiembre —al día siguiente de que Crisci le indicara a Guzmán Arguello que debían bajar el volumen del terraplén y que éste se negara — D. G. —Jefe de Obra por L.P. P.— le envió a M. R. —jerárquicamente su superior— el siguiente mensaje: ***“Anduvo crisi y me pidio la cabeza de G.. T aviso x si lo llaman a M.”***.

El 20 de diciembre —día previo a la visita de obra que dio origen el informe de Hiriart—, R. le dijo a G. que había ***“rumores de inspección de calidad en ruta 19”***. G. le contestó que ***“algo sabía”*** pero que ***“aparentemente iba al tramo de San Francisco”***. El 28 de diciembre, R. le indicó lo siguiente a G.: ***“Hagamos limpiar todas las compus que tengan info”*** (el resaltado me pertenece).



El 19 de enero de 2018 por la tarde—un día después de ser apartado de la obra de la Ruta Nacional N° 19— Mardiza llamó telefónicamente a G.. A la noche Mardiza le consultó si *“Anduvo todo bien?”*, a lo que G. contestó *“Si llego a la tarde. El lunes la ponemos a trabajar”*. El 22 de enero, G. le envió un mensaje diciéndole *“Necesito los papeles del q va a facturar el equipo”*.

El 15 de febrero, Mardiza le dijo que necesitaba algunos datos para hacer el borrador del contrato, puntualmente, agregó que necesitaba *“domicilio legal, y si m. es el apoderado, nro de documento”*. G. le respondió que el apoderado era él y le dio su domicilio.

En este sentido, es dable destacar en este punto otro hallazgo realizado en el marco de los allanamientos. Me refiero a una propuesta contractual sin firma, encontrado en el domicilio de Mardiza. Este, era entre L. —en carácter de socia-gerente de MyC Servicios S.A.S.— y G. —por la empresa contratista L.P. P. S.A.—, está fechado el 15 de febrero de 2018 y refiere al alquiler de una retroexcavadora *“Hyundai”* que se utilizaría obra vial Ruta Nacional N° 19, Tramo II.

Por otra parte, se obtuvieron distintos correos electrónicos intercambiados entre los investigados. Veamos algunos de los más significativos.

El 18 de abril de 2017, por ejemplo, Crisci le envió a Gabriel Losi un correo electrónico en el que el funcionario expresó que *“desde vialidad consideramos que la relación empresa-proveedores es una relación entre privados, en la cual vialidad no se debe entrometer”*.

Por otra parte, en junio de 2017 se pueden observar correos electrónicos en los que personal de L.P. P. consultó (con Losi en copia) sobre los avances de un *“pedido de cotización de revisión de puentes”*, en el que se contestó desde Losi S.A. que *“lo llame a Crisci y me dijo que B. estaba en el tema. Eso fue todo”*.



# *Poder Judicial de la Nación*

Se hallaron mensajes también de Losi a integrantes de L.P. P. en los que habló de evaluar cantidades alternativas y refirieron que había que “acordar qué cota de terraplén genera necesidad de reemplazo”.

También se encontraron correos entre Losi y R. relativos a la gestión de certificados de obra, construcción de terraplén, determinación de cotas, etc. y dejaron a la vista una habitualidad con Crisci relativa a cuestiones de la obra.

## **V.- La solución:**

En apretada síntesis, las defensas coincidieron en que **i)** no se sumaron elementos novedosos respecto del acervo probatorio con que se contaba a la hora de dictar el procesamiento de manera previa y que, por tanto, **ii)** no se habría probado la subejecución de la obra, para lo cual es necesario que se realice un peritaje. A su vez, **iii)** indicaron que el accionar posterior de la Dirección Nacional de Vialidad en la obra implicaba una convalidación de los trabajos previos. Asimismo, **iv)** sobre la existencia de suelo suelto sobre la base de asiento indicaron por un lado, que esto implicaría que el estado final del terraplén sería uno que no se midió, y por otro lado, que el relleno de la base de asiento significaría que se intentó corregir la subejecución. La defensa de P. señaló sobre su defendido que **v)** las irregularidades fueron detectadas sólo en el subtramo de Luis Losi S.A. y que Hiriart dijo que no podía afirmar que se habían eliminado datos de la Estación Total en el obrador de P.. A su vez, **vi)** expresó que la ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas no se encontraba vigente al momento del hecho.

## **V.1.- Los procesamientos de los funcionarios, empresarios y personas interpuestas. Valoración de este tribunal:**

En diciembre del 2017 se realizó una inspección en la obra vial del Tramo II de la Ruta Nacional N° 19. En el obrador de la contratista Luis Losi — donde comenzó la inspección— sucedió lo siguiente: la Ingeniera Hiriart —al frente de la auditoría— solicitó diversa documentación e información específica de la medición de perfiles previos. Se le informó que a tales fines se utilizaba un equipo



GPS y, entonces, solicitó aquel equipo de medición. A los tres (3) o cuatro (4) minutos de que la inspección comience a descargar los datos, el equipo fue retirado. Acordaron que el mismo sería devuelto ese mismo día por la tarde, y que mientras tanto, visitarían el obrador de P..

Así fue que en el interín se dirigieron a la oficina de la otra empresa contratista, L.P. P.. Allí el jefe de obra —G.— bajó lo que tenía en su computadora sobre perfiles transversales, sin embargo en el instrumento de medición “Estación Total” no había mediciones sobre los mismos, por lo que no pudieron comparar los informados con las mediciones reales. La defensa dijo que en este subtramo no se encontraron irregularidades. Sin embargo, justamente, aquí **nada se encontró**, dado que la información no estaba disponible para realizar la auditoría. No es menor que en el obrador de esta contratista ya estaban al tanto de la visita, y esto no solo porque Hiriart avisó en el obrador de Losi S.A. que se dirigiría al obrador de L.P. P., sino porque surgió de las conversaciones del celular de G. que estaba al tanto de la visita desde el día anterior. Esto permite reforzar la teoría de que la información tranquilamente pudo ser borrada del equipo de medición para impedir su comparación con los datos informados. Esto no solo porque así lo hizo la empresa junto con la que conformaban la UTE, sino porque el 28 de diciembre, R. —superior de G.— le indicó que hiciera limpiar todas las computadoras con información, lo que es un indicio más que elocuente.

Pero continuemos entonces con lo sucedido. Al regresar en el horario pactado al obrador de Losi, el GPS no se encontraba en el obrador porque se lo habían llevado a otra obra. Cuando tuvieron acceso al aparato de medición —recién al día siguiente— en el mismo faltaban gran cantidad de archivos: encontraron solo los 23 archivos que habían llegado a transformar, y habían sido eliminados los 51 faltantes. Sin embargo, debido a que habían logrado descargar la totalidad en crudo —cuestión que desconocía el personal del obrador—, pudieron transformarlos y compararlos con los perfiles previos que el jefe de obra de Losi —R.— entregó en su computadora. En ese momento observaron que la diferencia

Fecha de firma: 10/04/2025

Alta en sistema: 15/04/2025

Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO JOSE BOICO, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: GASTON GONZALEZ MENDONCA, SECRETARIO DE CÁMARA



#39611682#451328730#20250410125626815



# *Poder Judicial de la Nación*

USO OFICIAL

daba cero en la totalidad de los casos, lo que indicaría “*que la comparación se está realizando en el mismo punto*” y *la diferencia de cota en el centro de perfil se encuentra en todos los casos entre (-14 cm) y (-30 cm)*” (el resaltado me pertenece). Sobre esto aportó claridad el Agrimensor B. en su declaración testimonial, quien explicó que era evidente que había una alteración en los datos porque es imposible medir dos veces con la misma precisión en igual coordenadas. Fue contundente al aseverar que “*...no hay aparato en el mundo que pueda hacerlo, un punto puede ser casualidad, pero muchos puntos, es evidente que alteraron la Z*” (el énfasis me pertenece).

No parece haber —ni fue aportada por las defensas— una explicación que razonablemente de cuenta lo que sucedió con el dispositivo de medición GPS cuando la Unidad de Supervisión estaba descargando los datos para poder realizar la inspección. Es que no solo fue retirado el aparato de medición de manera intempestiva en medio de la descarga de su información sino que no fue devuelto en el horario pactado y, al ser por fin devuelto, había sido borrada gran parte de su información. No solo habían sido borrados 51 archivos sino que, coincidentemente, habían sido eliminados puntualmente la totalidad de archivos que, desde el obrador de la empresa contratista, suponían que el personal de la Unidad de Supervisión no había podido bajar. Es decir: retiraron el GPS en medio de las tareas de descarga, no lo devolvieron en el tiempo acordado y, al devolverlo, el GPS solo contenía los 23 archivos que la Unidad de Supervisión había logrado descargar y transformar.

Por otro lado, la defensa de R. —jefe de obra de Luis Losi S.A. — manifestó que el GPS no era el instrumento de medición de uso oficial de la obra, y que el instrumento exigido por pliego era la Estación Total. Sin embargo, esto se contradice, con lo dicho por Mardiza —Supervisor de Gestión de Obra— al momento de realizarse la inspección.

Recordemos que al presentarse en el obrador de Luis Losi, Hiriart consultó a Mardiza sobre el proceso y los equipos que utilizaban para la



determinación de los perfiles previos y éste le respondió que *“para la determinación de los perfiles previos y la base de asiento participaban Empresa y Supervisión con GPS de la empresa (Luis Losi S.A)”* y que si bien la empresa Luis Losi S.A. contaba tanto con GPS como con Estación total, ésta última era *“utilizada para el corte de cancha y control de estabilizado”* y que *“la Supervisión contaba con Estación Total pero que no la usaban prácticamente”* (el resaltado me pertenece).

En este punto es necesario traer a colación dos cuestiones. Por un lado, que efectivamente de las mediciones que luego se plasmaban en los certificados entregados mensualmente a la DNV, participaba tanto la empresa contratista como la Supervisión de la Dirección Nacional de Vialidad. Estos certificados, como fue dicho de manera precedente, fueron suscriptos por A. E. A. —representante técnico de la UTE—, Fernando Mardiza —Supervisor de Gestión de Obra— y A. S. —Supervisor de Calidad—, A. S..

Por otro lado, hay que destacar lo planteado por la defensa de Gabriel Pedro Losi y de Luis Losi S.A., en tanto Luis Losi S.A. habría adquirido el equipo GPS por ser de última generación para *“realizar una obra lo mejor posible”* —hago un paréntesis: esto reforzaría lo dicho por López respecto de la precisión de las mediciones realizadas con este aparato—. Pero sigamos, indicaron que el instrumento oficial de medición es la Estación Total y no el GPS que fue utilizado y entregado para la inspección, que éste último era un instrumento de la contratista, y que las mediciones debían ser efectuadas con la Estación Total —que sería, por pliego, el instrumento oficial de medición de la obra—. Agregaron, entonces, que *“toda la hipótesis acusatoria...se basa en un procedimiento contrario a la reglamentación aplicable”*. Se fuerza imperioso detenerse aquí: la contratista entonces habría entregado para la inspección y descarga de datos un aparato de medición no oficial —luego de manifestar que el equipo oficial no era utilizado—. Frente a una auditoría que encontró diferencias/inconsistencias en las mediciones entregadas y aquellas informadas, se excusó diciendo que no deben ser tenidos en



# *Poder Judicial de la Nación*

cuenta aquellos datos por ellos mismos entregados porque surgen —en sus propias palabras— de “un procedimiento contrario a la reglamentación aplicable”. Y esto porque **la única medición válida sería la realizada con otro aparato** —el oficial— **que ellos decidieron no utilizar**.

Los argumentos defensasistas han sido analizados con el debido detenimiento, sin embargo estos no llegan a rebatir lo que surge de los elementos probatorios disponibles en la causa que son, por demás, contundentes. Además, la lectura en conjunto de los distintos argumentos defensasistas, en lugar de aportar claridad a lo ocurrido, generan aún más desconcierto. Esto es así puesto que ni siquiera parece haber acuerdo sobre i) cuál debía ser el equipo de medición; si efectivamente el GPS no debía ser utilizado, no esclarecen ii) por qué se tomaron las medidas con aquel —y no con el oficial— y por qué, entonces, fue entregado para la inspección; tampoco se explica iii) qué sucedió con las medidas que no concordaban, y, menos aún, iv) por qué fueron borrados archivos del aparato de medición que fue entregado para realizar la auditoría.

Asimismo, tampoco se explica el suelo suelto que encontró el equipo de inspección sobre la base de asiento al regresar el lunes para continuar con la auditoría. Las defensas expusieron que ese relleno demostraría que se quiso subsanar la subejecución, sin embargo esto no resulta verosímil dado que podrían, entonces, haberlo rellenado luego de que el equipo de inspección pudiera tomar las mediciones correspondientes. Sin embargo, aquello se rellenó durante el fin de semana, impidiendo así que el lunes se pueda tomar medida alguna. La mera exposición de un punto de vista sobre aquel hecho no es suficiente dado que, justamente, según la hipótesis acusadora, el relleno de suelo suelto no cumplía la función de rellenar para “no subejecutar” sino que, por el contrario, buscaba impedir que la inspección pudiera realizar las mediciones necesarias para corroborar si la base de asiento había sido efectivamente bajada más de lo debido o no. Esto cobra fuerza al contrarrestarlo con lo que relató Guzmán Argüello en la Nota Interna N° 19, respecto de que Crisci le indicó al Encargado de Obra por parte de



CRZ Construcciones S.A., ***“Bajá lo máximo que puedas, unos 0,20 metros antes del agua. Si viene alguna visita, tapás todo y listo”*** (el énfasis me pertenece). Este es un elocuente indicio de que esta bien podría ser una práctica que se reiteraba en distintas obras mientras Guillermo Duilio Crisci se desempeñó como Coordinador Ejecutivo de la Dirección de Obras de Casa Central de la Dirección Nacional de Vialidad.

Por su parte, también son deficientes los argumentos defensasistas respecto de que i) el hecho de que la Dirección Nacional de Vialidad haya aprobado la obra de manera definitiva implicaba que ya no tenía inquietudes sobre la misma, y que ii) en tal caso *“...la DNV pudo haber hecho una nueva medición...en el momento exacto en el que Hiriart presentó su informe”*. Comenzaré por esto último y continuaré luego con el primer argumento. El Ingeniero Lopez en su declaración testimonial —con la que, insisto, no se contaba en el primer auto de procesamiento— explicó que luego del informe realizado por Hiriart, se designó un nuevo equipo para continuar con la inspección de la obra. Este, según dijo, no debía repetir las mediciones realizadas anteriormente, sino poner en valor todo lo que se podía medir. Explicó que esto era así porque ***“no todo es medible todo el tiempo, porque las obras son dinámicas...”*** (el énfasis me pertenece).

Esto tiene relación con otro punto resaltado por las defensas, y es el hecho de que no se haya realizado algún tipo de medición posterior/peritaje que corrobore o eche por tierra el informe que sustentó esta investigación. Y es que, como también resaltó Hiriart en su segunda declaración testimonial, los perfiles previos no son “algo físico”, sino que son mediciones que se realizan en un momento dado y que estas no quedan “marcadas” (para esto existen, justamente, los certificados mensuales de avance de obra). Por este motivo —cuando le preguntaron si no se podía realizar “una perforación” para saber la medida— respondió de manera negativa. Detalló un complejo análisis de suelo que podría realizar un geólogo para determinar las distintas características que encuentra y, de



## *Poder Judicial de la Nación*

ese modo, establecer en qué momento cambia el suelo, pero insistió en la dificultad para comprobarlo con precisión y exactitud, sobre todo en este caso particular, que las diferencias eran entre 14 y 30 centímetros.

Retomaré ahora lo dicho por las defensas en tanto, según su punto de vista, la Dirección Nacional de Vialidad con su actitud posterior dejó en claro que no tenía inquietudes sobre la misma y convalidaba lo que se había ejecutado. En este sentido, de la testimonial de López surge que la Dirección Nacional de Vialidad realizó acciones a raíz del informe. Por un lado, i) **se designó una nueva inspección** y ésta tomó todos los recaudos de allí en adelante, aunque sobre lo ya realizado no podía hacer más que verificar en papeles dado que no es posible realizar corroboraciones sobre lo que se fue haciendo mes a mes. Por otro lado, y a raíz de las irregularidades detectadas, ii) **se envió una Circular de Vialidad Nacional complementaria de los pliegos relativos a las mediciones**, que les indicaba a todas las inspecciones del país que las mediciones debían enviarse antes de iniciar las tareas, dado que la medición previa es la base para la medición final.

Es decir, que se haya continuado con la ejecución de la obra vial a pesar de haber detectado inconsistencias en las mediciones e irregularidades por parte de los funcionarios/empresarios a cargo, no quiere decir i) que hayan convalidado el accionar irregular previo ni que ii) no hayan tomado medida alguna. Sobre todo, teniendo en cuenta que las acciones posteriores estuvieron claramente orientadas a impedir que se repitieran situaciones como la investigada. Parecería absurdo pretender que se deje una obra inconclusa por haberse detectado irregularidades en la misma. Sin embargo, aparecen razonables las medidas tomadas antes de continuar su ejecución, sin que esto implique una convalidación de las irregularidades previas.

Si esto no fuera suficiente, las conversaciones incorporadas también permitieron fortalecer la hipótesis de la connivencia entre los empresarios y funcionarios, como así también, con sus allegados, derribando así los argumentos

Fecha de firma: 10/04/2025

Alta en sistema: 15/04/2025

Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO JOSE BOICO, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: GASTON GONZALEZ MENDONCA, SECRETARIO DE CÁMARA



#39611682#451328730#20250410125626815

USO OFICIAL

defensistas. Como se observó en las conversaciones mantenidas entre G. y Mardiza —al día siguiente de que este último fuera apartado de la obra—, estos hablaron sobre la máquina retroexcavadora que fue alquilada por L.P. P. a MyC Servicios S.A.S. de la que L. —esposa de Mardiza— era socia-gerente. Mardiza fue quien solicitó a G. los datos necesarios para celebrar aquel contrato de alquiler del equipo. Esto implica no solo que estaba Mardiza involucrado en el negocio sino que los miembros de las empresas contratistas conocían esta situación —aunque su defensa fue haberlo desconocido—.

Sobre el alquiler de este equipo, también se cuenta con un formulario —aportado por el Presidente de L.P. P., J. H. F.— titulado “*condición de subcontratista*”, en el cual figura Mardiza como contacto de la empresa MyC Servicios S.A.S., junto a su correo electrónico y su número telefónico personal. Es decir: esto no sólo torna evidente que Mardiza era parte de aquella empresa y que tenía un rol activo en la misma, sino que el Presidente de L.P. P. —F.— conocía esta situación.

Asimismo, Losi y Crisci intercambiaron correos electrónicos hablando de la “*relación empresa-proveedores*” en la que Vialidad Nacional no debía “*entrometerse*”. En el mismo sentido, directivos de las empresas contratistas Luis Losi S.A. y L.P. P. intercambiaron correos sobre la cotización de un trabajo de revisión de puentes donde la gente de P. responde que había llamado a Crisci por el tema.

Esto se vincula directamente con la empresa INAC Consultores SRL, la cual, según surge de las constancias, fue constituida por Crisci y T. en marzo de 2015. En marzo de 2016 —cuando asumió como funcionario— cedieron sus cuotas societarias, tanto él como su pareja T., sus cuotas a M. y su esposa. Esta empresa recibió diversos pagos por parte de la UTE contratista durante la ejecución de la obra, facturando muchos de ellos a nombre de T. y de C. (hijo). Si bien se postuló que aquellos pagos fueron legítimos por prestación de servicios profesionales por parte de ellos, y que no tenían más vinculación con la consultora



## *Poder Judicial de la Nación*

USO OFICIAL

que la mencionada prestación de servicios, estos intercambios de correo muestran que seguían vinculados al manejo de la misma. Para ser más claro: esta Consultoría pertenecía a Crisci y T., la cedieron a M. y esposa al asumir, Crisci, la función pública. Dijeron no tener más vinculaciones con el manejo de la misma, sin embargo reflejan lo contrario las conversaciones halladas, en las que, por un lado, las contratistas consultaban directamente con Crisci sobre la revisión de puentes que debían consultar con INAC y, por otro, en las que Crisci le dice a Losi que *“la relación empresa-proveedores es una relación entre privados, en la cual vialidad no se debe entrometer”*.

Respecto de la medición de perfiles, el análisis integral de la denuncia inicial a la luz de los elementos incorporados, dejó de manifiesto que parecían ser moneda corriente las órdenes relativas a bajar los perfiles previos de la base de asiento y el borrado de información relativa a las mediciones de las computadoras. Me refiero puntualmente a, por un lado, lo narrado en la Nota Interna N° 19 por Guzmán Argüello, en la que puso de manifiesto ante sus superiores que en septiembre del 2017 Crisci, lisa y llanamente, le había indicado que iban a bajar los perfiles de la base de asiento “para ganar plata”. Y, por otro lado, a la indicación que recibió G. en diciembre de 2017 para “hacer limpiar” todas las computadoras que tengan información.

Como quedó en evidencia, las testimoniales de López, B. y A. ratificaron la totalidad del informe y aportaron datos y detalles que permitieron reforzar aquel. Además, fueron valiosas incorporaciones probatorias las conversaciones extraídas de los distintos equipos electrónicos secuestrados en los allanamientos realizados. Cada una de ellas afianzó distintos aspectos de la hipótesis acusadora.

Por todo lo expuesto de manera precedente, es posible aseverar que el cuadro probatorio se ha fortalecido y consolidado en comparación al primer auto de mérito, y que, con lo ahora disponible, es posible afirmar de manera provisoria los hechos y avalar las responsabilidades atribuidas en el decisorio



impugnado. Por este motivo, se confirmarán los puntos dispositivos II, III, IV, V y IV del auto de mérito cuestionado, que disponen los procesamientos de Fernando Mardiza, E. L., A. A., C. R., G. T. L., A. T., C. M., Gabriel Losi, M. P. y J. F..

## V.2.- Los procesamientos de las personas jurídicas

Con respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas involucradas, comparto el criterio adoptado por mis colegas; sin embargo, realizaré algunas precisiones.

Las dos empresas fueron procesadas por el delito de cohecho activo en los términos de la ley 27.401. El planteo defensorista señaló que no se encontraba vigente esta norma al momento de los hechos. Veamos. La ley 27.401 fue sancionada por el Congreso de la Nación el 08 de noviembre de 2017 y publicada en el Boletín Oficial el 01 de diciembre de 2017. En su artículo 39, la ley indica que “...entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial”, por lo que la misma entró en vigor el 1 de marzo de 2018.

Lo que aquí se discute, en términos penales, refiere al tipo del artículo 258 del Código Penal, que reprime con prisión de uno a seis años —y con inhabilitación especial de dos a seis para el caso que el sujeto activo sea funcionario público— a aquel que **diere** u **ofreciere** dádivas en procura de las conductas reprimidas por los artículos 256 (cohecho pasivo) y 256 bis (tráfico de influencias). Cuando las conductas previstas por el artículo 258 se realicen en post de la figura del artículo 256, estaremos frente a **cohecho activo**. Y cuando se realice en post de las conductas previstas por el 256 bis, estaremos frente a un **tráfico de influencias activo**. Es decir, esta figura es la contracara de aquellos dos tipos penales que sólo podrán configurarse si existe esta faceta activa —aquellos, son delitos de *codelinquencia necesaria*—. Aquí nos interesa la figura típica de cohecho activo, es decir: aquel **dar** u **ofrecer** en procura de que un funcionario público, al **recibir dinero o cualquier otra dádiva o aceptar promesa, haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones**. En este tipo penal, a diferencia del cohecho en su faz pasiva —que, como dijimos, es de *codelinquencia necesaria*—, el cohecho activo no





# *Poder Judicial de la Nación*

requiere que se configure la otra figura —es decir, la pasiva— para consumarse: con el simple *dar u ofrecer*, estamos frente a la consumación del delito. Estos dos verbos típicos pueden darse uno u otro, o bien darse ambos.

Volvamos al caso en concreto. En lo que aquí se investiga, las empresas involucradas no eran pasibles de ser sancionadas en el momento de la subejecución de la obra, dado que no estaba en vigencia la ley que permite atribuirles responsabilidad penal a las personas jurídicas. Sin embargo, al entrar en vigor la norma (marzo de 2018), las sociedades encausadas, hasta lo que se conoce, continuaron realizando pagos —*dando*— dinero a los funcionarios públicos por intermedio de la consultora INAC SRL y MyC S.A., bajo la apariencia de un alquiler celebrado en relación a maquinaria y contrataciones de servicios profesionales. De allí que no se puede descartar, de momento, que la maniobra investigada a su respecto haya concluido antes de la entrada en vigencia de la ley, insisto, debido a los pagos realizados durante el año 2018. Si los mismos fueron hechos en virtud de acciones típicas ejecutadas antes o después de la entrada en vigencia de la ley será una cuestión a dilucidar en el marco de un debate más amplio; incluso, nada impediría modificar lo aquí decidido si se corroborase lo contrario.

De allí que votaré por confirmar este punto del auto en revisión.

## **V. 3.- La prohibición de salida del país**

En cuanto a este punto, no hay motivo para considerar que la prohibición de salida del país sea una medida desproporcionada, ergo, ésta resulta razonable. Por un lado, ni siquiera es de las medidas más gravosas del catálogo previsto por el artículo 210 del CPPF. Por otro lado, nada impide que, ante el caso de una eventualidad de relevancia, pueda requerirse la autorización excepcional del tribunal, que evaluará o no su procedencia en el caso en particular. En este sentido, y atendiendo a razones de eficacia, necesidad y proporcionalidad, de conformidad con lo previsto en las normas aplicables y con mi criterio sostenido en diversos precedentes (ver CFP 922/2021/3/CA1 “Á. A.”, del 15/4/21 y CFP



4758/2021/1/CA1 “V” del 26/8/21, entre otras) habrá de confirmarse el punto X del decisorio impugnado en tanto dispone la prohibición de salida del país.

#### **V. 4.- El embargo**

Respecto de la crítica a los montos de los embargos fijados, deben ser desechadas. La estimación realizada se ajusta a los parámetros de mensuración que hiciera en los votos emitidos al resolver el caso CFP 957/2020/6/CA5 “L., J. G. s/monto embargo” con fecha diciembre de 2021 y CFP 834/2020/1/CA1, con fecha 29/12/21 (registro n° 50.436 y sus citas).

Así lo voto.

En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal **RESUELVE**:

**CONFIRMAR** el pronunciamiento recurrido en todo cuanto dispone y fue materia de recurso.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

EDUARDO GUILLERMO FARAH  
JUEZ DE CÁMARA

ROBERTO JOSÉ BOICO  
JUEZ DE CÁMARA

MARTIN IRURZUN  
JUEZ DE CÁMARA

#### **Ante mí:**

GASTON FEDERICO  
GONZÁLEZ MENDONÇA  
SECRETARIO DE CÁMARA

**Cn° 47.981; Reg. N° 53.067.**

